



ESTRUCTURA SOCIAL DEL TRABAJO Y CALIDAD DE LAS INSERCIONES LABORALES EN LA ARGENTINA (2010-2015)

DESAFÍOS PARA LAS ACTUALES POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO

Coordinadores del estudio:

Eduardo Donza

Agustín Salvia

Índice temático:

Resumen ejecutivo

Estado de situación

1. Situación del escenario laboral
2. Sector micro-informal
3. Empleo de baja calidad
4. Percepciones ante la pérdida del empleo
5. Características del empleo en hogares con asistencia social

Anexo

Esquema de dimensiones, variables e indicadores

Ficha técnica de la encuesta

Buenos Aires, mayo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO

➤ A fines de 2015, solo 43% de los activos poseían un trabajo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales (8,3 millones de trabajadores), 31,9% poseían un empleo precario (6,2 millones), 15,6% realizaban actividades de escasa remuneración, alta inestabilidad o eran beneficiarios de políticas de empleo (3 millones) y 9,4% se encontraban desocupados (1,8 millones). En total, más de 10 millones de personas sufrían problemas de empleo.

➤ En el mismo año, uno de cada cuatro trabajadores (24,9%) se encontraron desocupados por lo menos una vez en los últimos doce meses (4.3 millones). Expresando esto un elevado riesgo de desempleo estructural. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen. Este porcentaje se incrementó, entre 2010 y 2015, de 81,2% a 84,5%.

➤ Entre 2010 y 2015, el empleo total se expandió 8% pero se incrementó sólo 3% la cantidad de puestos de trabajo con empleo pleno de derechos, disminuyó en 5% el número de empleos precarios y aumentaron 80% los ocupados en subempleos inestables. Este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas de empleo contra cíclicas de generación de puestos de trabajo transitorios, fue el que limitó los niveles de desocupación en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo genuino.

➤ La persistencia de un amplio sector micro-informal (dueños y asalariados de pequeñas empresas, cuentas propias no profesionales, trabajadores domésticos o familiares), en la estructura productiva constituye uno de los mayores inconvenientes en el mercado de trabajo por sus características de reducido nivel de productividad y retribuciones. En los últimos años este sector incrementó su incidencia, a fines de 2015, representaba 53,9% de los trabajadores ocupados (9,4 millones de personas).

➤ En este marco, se observa un elevado porcentaje de trabajadores no asalariados, en su mayoría vinculados al sector micro-informal. Este tipo de empleo, sobre todo los cuenta propia que no constituyen una mano de obra especializada, son los segmentos que sufren menor nivel de retribución. Por el contrario, en el sector formal, los empleadores de medianas y grandes empresas, junto a los profesionales independientes, son los que en promedio perciben mejores remuneraciones. En 2015, el 43,9% del total de ocupados realizaba actividades no asalariadas. Este tipo de trabajo incluía al 20,7% de los trabajadores del sector formal y al 69,6% de los del informal.

➤ La incidencia del incumplimiento de los derechos laborales es altamente diferencial según el sector de ocupación. En 2015 se encontraban en esta situación el 82,2% de los trabajadores del sector micro-informal mientras que solo el 20,5% de los del formal y el 12,1% de los ocupados en el sector público. Esta distribución se modificó levemente entre 2010 y 2015 a favor de los trabajadores del sector público y del segmento informal, mientras que aumentó en el caso del sector formal. Sin embargo, en términos generales, la población ocupada en puestos precarios o subempleos pasó de 50,4% a 53%. En el caso de los asalariados con estos problemas de empleo pasaron de 25,2% a 29,9%, y para los no asalariados de 82,9% a 81,3%, es decir, sin un cambio significativo.

➤ A finales de 2015, 59,5% de los hogares poseía un jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas holgadas, mientras que 20,8% de los hogares percibía algún plan de ayuda familiar y 19,5% no poseía ninguna cobertura social o dicha cobertura era deficiente. En este contexto, el 57,4% de la población económicamente activa –

protegidos o no- residían en hogares relativamente incluidos a la seguridad social (11,1 millones); el 22,4% a hogares sin cobertura o con cobertura deficiente (4,3 millones); y el 20,2% a hogares protegidos por programas sociales o ingresos insuficientes de la seguridad social (3,9 millones).

➤ Los integrantes de hogares que perciben algún plan de asistencia social presentan una situación laboral más vulnerable: su participación en el mercado de trabajo es menor (sólo el 62,3% participa en el mercado de trabajo), sus posibilidades de empleo son más escasas (únicamente 52,8% de ellos están ocupados) y es mayor el fracaso al buscar un empleo (la desocupación llega al 15,3% de los activos). Sin duda, la actual coyuntura económica está agravando la situación socio-laboral de estos sectores cuyas actividades están fuertemente vinculados con el nivel de actividad y el consumo en el mercado interno.

➤ En efecto, cabe destacar que sólo únicamente 5% de estos pudo obtener un empleo pleno de derechos, más de la mitad poseen un empleo precario, 29,5% poseen sólo un subempleo inestable y 39% estuvo por lo menos una vez desocupado en el último año. Entre los ocupados, el 77% trabajaba en el sector micro-informal, el 15,9% en el sector formal y sólo 6,8% en el sector público (incluyendo programas de empleo). En el total, el 95% de la población activa de estos hogares presentaba problemas de empleo (empleo precario, subempleo o desempleo, con un total de 3,7 millones de personas).

➤ En similar situación a estos sectores asistidos se encuentra la población activa en los hogares sin ningún tipo de cobertura ni asistencia social. Si bien sus tasas de actividad y de empleo eran algo mayores, la población de estos hogares se encontraban mayoritariamente ocupados en el sector micro-informal (82,4%), y en menor medida en el sector formal (11,1%) y en el sector público (6,9%). En este caso, sólo 15,4 % de la población activa de estos hogares cuenta con un empleo pleno de derechos, mientras que 84,6% presenta problemas de empleo: 49,6% precarios, 24,2% en empleos de indigencia y 10,8% en situación de desempleo. En total, más de 4,3 millones de trabajadores. Es también sobre ellos donde está teniendo mayor incidencia la caída del consumo interno y la falta absoluta de otras protecciones: aumentos paritarios o en programas sociales, tarifas sociales, salarios familiares, etc.

➤ Ambas condiciones contrastan claramente con la situación que registra la población activa de los hogares cubiertos por la seguridad social o los empleos de calidad. En principio, entre los trabajadores de estos hogares el 20,8% está ocupado en el sector público y el 43,1% en el sector privado formal. Por lo tanto, ocurre lo mismo en términos de calidad de la inserción laboral: el 67,2% cuenta con un empleo de alta calidad y sólo el 6,8% se encuentran desocupados, más de la mitad con un tipo de desempleo friccional. En cualquier caso, se trata de segmentos que sin duda están sufriendo la recesión pero de manera mucho más amortiguadas por factores varios: aumentos paritarios, incrementos jubilatorios, ampliación de las asignaciones familiares, reducción del mínimo no imponible, etc.

➤ Las retribuciones al trabajo difieren según el perfil de trabajadores de cada uno de los tipos de hogar. El mayor ingreso medio laboral mensual –en el último trimestre de 2015- lo recibían los ocupados de hogares con jefe con empleo pleno, jubilado o rentista (\$ 9.889), en menor medida los de hogares sin cobertura o con cobertura deficiente de seguridad social (\$ 5.508.-) y, por último, los trabajadores de hogares con algún plan de ayuda social (\$ 4.709.-). El ingreso horario de los ocupados residentes en hogares con algún programa social de asistencia era similar a los de hogares sin cobertura o que la poseen en forma deficiente, cerca de \$ 40.- Este valor se duplica (\$ 82,5.-) si se considera el promedio de retribuciones horarias de trabajadores residentes en hogares con jefes con empleo pleno, jubilado o rentista.

ESTADO DE SITUACIÓN

El Observatorio de la Deuda Social Argentina presenta este informe basado en datos generados por la Encuesta de la Deuda Social – Serie Bicentenario para el período 2010-2015, con registros relevados los últimos trimestres de cada año. Sin duda, tal como se planteó en un documento de trabajo anterior¹, la situación actual es diferente a la del momento en que se relevaron los datos del año pasado. Esta nueva etapa está signada tanto por expectativas positivas como temores y preocupaciones. Esto ocurre en el marco de un conjunto de medidas que enfrentan el desafío de ordenar los desajustes macroeconómicos dejados por la administración anterior, así como también crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento.

Los indicadores de éxito de este modelo deberían dar cuenta en el mediano plazo de una mayor estabilidad económica, menores regulaciones comerciales, crecimiento de las inversiones, mayor participación del país en el comercio mundial, fuerte creación de nuevos empleos de calidad, efectiva reducción de la pobreza, entre otros horizontes sociales, todo lo cual supone una especial confianza en el derrame que puedan generar los mercados sobre los segmentos más informales de la economía y los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese marco, los desajustes estructurales acumulados constituyen una herencia de mucho peso. Ahora bien, el problema puede agravarse si hay un error de diagnóstico o una equivocación en la elección de las políticas, por mucho que las decisiones estén bien intencionadas.

Las deudas sociales suelen traspasarse de un régimen político a otro sin costo de inventario. Es esta una práctica que no hace bien a la democracia ni favorece a los ciudadanos, sobre todo si se trata de sectores socialmente vulnerables. La información pública veraz, objetiva, amplia y dada a tiempo sirve para que gobernantes, dirigencias y ciudadanos puedan evaluar cursos de acción, identificar riesgos, debatir opciones y acordar decisiones. El acceso a información pública cierta hace posible que la ciudadanía pueda comprender mejor las políticas de gobierno, sus consecuencias y las decisiones que se toman en su nombre. Una ciudadanía bien informada puede exigir rendición de cuenta, comprometerse con su tiempo histórico y demandar garantías y eficiencia a las dirigencias económicas, sociales y políticas.

En el actual escenario político del país resulta imprescindible hacer un balance realista orientado a entender cabalmente cuál es el punto de partida en materia de deudas sociales que debe afrontar la nueva administración. Por supuesto, es también fundamental que la ciudadanía logre discriminar los efectos sociales que generan las nuevas decisiones de aquellas condiciones –tanto positivas como negativas- que forman parte de una herencia del pasado.

Como otras veces hemos señalado, las estadísticas sociales –siempre mejores cuando son públicas– ofrecen información acerca de problemas relevantes que, una vez interpretados, constituyen un conocimiento valioso para la acción, el debate y la

¹ Se hace referencia al informe “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2015. Tiempos de balance” realizado en abril de 2016 por el ODSA. Disponible en: <http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf>

definición de políticas. Este modo de generar conocimiento permite sacar conclusiones más objetivas sobre los problemas que preocupan a la sociedad. Datos como los índices de precios, pobreza, empleo y desigualdad, entre otros, constituyen medidas cruciales para evaluar la calidad de vida de una población. Sin lugar a dudas, se trata de información sensible tanto a nivel social como con referencia a los múltiples conflictos de todo tipo que atraviesan a una sociedad.

El gobierno anterior nunca acompañó diagnósticos que dieran malas noticias. En el actual escenario, aunque todavía muy poco ha ocurrido en materia de recuperar, actualizar y poner en discusión estadísticas públicas fiables, cabe al menos confiar en que existe una clara decisión política en este sentido. La reciente Ley en materia de información pública, abona en este sentido. En este contexto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina desea acompañar este proceso sin abandonar su misión académica de contribuir a dar cuenta de las invisibilizadas deudas sociales en nuestra sociedad. Ni antes como ahora nuestros informes han dejado de dar cuenta de las mejoras ocurridas en materia de inclusión ciudadana, bienestar económico y derechos sociales durante la década pasada. Sin embargo, también hemos en varias oportunidades destacado el hecho de que, pese a las extraordinarias oportunidades que tuvo el país durante esos años, ningún cambio sustantivo tuvo lugar en materia de dejar instalada una senda sustentable de efectivo desarrollo socioeconómico y socio ambiental. La pobreza, la marginalidad y la desigualdad serían actualmente, luego de una década de fuerte crecimiento, más estructurales que hace veinte o treinta años.²

Hace casi un lustro –desde 2012- que la economía está estancada en materia de inversión y crecimiento, sin creación de nuevos buenos empleos, al mismo tiempo que sometida a un desgastante proceso inflacionario, un generalizado desorden macroeconómico y un insostenible déficit fiscal. El final relativamente activo en materia de consumo, protección y estabilidad social del último período fue posible en la medida que se desplazaban desequilibrios, esquivaban deudas y traspasaban vencimientos. En ese marco, el gobierno saliente optó por consumir activos financieros, productivos, energéticos, ambientales, sociales y políticos con el fin de garantizar su propia gobernabilidad. La ampliación de los programas de asistencia a los pobres hizo posible una necesaria y conveniente paz social.

La negación sistemática de problemas acuciantes, entre ellos la inflación, la pobreza o la inseguridad, habría sido un instrumento del discurso político para confrontar en el plano retórico. Por otra parte, la incapacidad para acordar consensos sociopolíticos amplios impidió una vez más que el país pudiera contar con un plan estratégico para enfrentar tanto la emergencia como los problemas estructurales que nos mantienen en el subdesarrollo. Sin embargo, es también cierto que el actual cuadro de exclusión social no tiene como principal fuente la herencia recibida, sino que constituye el resultado de una acumulación de varias décadas de desaciertos, incapacidades y descompromisos dirigenciales.

² Por ejemplo, puede consultarse el V Informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina: “Progresos Sociales, Pobrezas Estructurales y Desigualdades Persistentes”, ODSA-UCA, 2015; o también, de Lindenboim-Salvia (compiladores) “Hora de Balance: Procesos de Acumulación, Mercados de Trabajo y Bienestar”, Eudeba, 2015.

En este contexto, la nueva administración apuesta a alcanzar soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica; a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar. Para tal efecto, en lo inmediato, el gobierno buscó salir del *default*, recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales, instalar un tipo de cambio más competitivo, bajar retenciones a las exportaciones, normalizar las variables macroeconómicas, reactivar la paralizada obra pública, ajustar tarifas, reducir el costo laboral por medio de una baja del precio relativo de los salarios, entre otras medidas; todo lo cual se supone debería mejorar el clima de negocios, atraer inversiones, bajar la inflación, retomar el crecimiento, reactivar el empleo y reducir la pobreza.

Pero crear las condiciones para dar lugar al esperado derrame implica atravesar –a juicio del gobierno- una tan dolorosa como inevitable transición. En este marco, con el fin de reducir el riesgo de obturar la paz social, la nueva administración también ha buscado activar –aunque a veces algo tardíamente- una serie de medidas de alivio social: aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados; entre otras medidas; a la vez que algunas de las cuales todavía son proyectos (ampliación de la AUH, pago de las deudas del Estado a los jubilados, reactivación del empleo en la construcción a través de la inversión pública en infraestructura).

Ahora bien, mientras se espera que este plan heterodoxo (no centrado en el equilibrio fiscal ni monetario) logre su cometido de recuperar la confianza y reactivar la inversión, algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión. La inversión de riesgo con recursos propios requiere para ellos de mayores garantías. Es decir, la estanflación especulativa ha seguido siendo la moneda de cambio de un empresariado nacional con escasa gimnasia capitalista. Es frente a este comportamiento que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, han optado por negociar salarios reales a la baja buscando protegerse de un problema mayor como es el desempleo. De ahí lo que parece ser una demanda legítima de mayor protección al empleo existente, aunque todavía no exista ni llegue a tener lugar una efectiva crisis ocupacional, más allá de los problemas estructurales acumulados.

Pero tal como mostramos en este informe, el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no lo están experimentando en realidad los segmentos formales de la economía sino los sectores informales; no sólo el 30% de los hogares que para subsistir además de realizar trabajos de indigencia reciben algún tipo de ayuda social, sino también miles y miles de microempresas informales y emprendimientos familiares; y con ellos una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores

independientes no profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (no menos de 3 millones de trabajadores); los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la situación crítica generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales, etc. Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” que emergen de medidas adoptadas por el actual gobierno.

En el informe antes citado de hace unos meses del Observatorio de la Deuda Social Argentina se buscó llamar la atención sobre esta situación, expresada en principio un aumento estimado en la tasa de pobreza de entre 24% y 27% o entre 29% y 33% (según la fuente de datos que se utilice) durante el primer trimestre del presente año. La estrategia adoptada para normalizar en parte las variables macroeconómicas habría generado más de un millón de nuevos pobres, fundamentalmente segmentos provenientes del sector informal y de las clases medias bajas. Este dato, aunque “impactante”, no deja de ser una estimación conservadora, más aún si consideramos la dinámica socioeconómica subsiguiente.

El problema es que las islas de fantasía no son buenas para promover debates ciudadanos o acuerdos sociales que fortalezcan las instituciones de la democracia y permitan resolver equilibradamente las emergencias y proyectar políticas de desarrollo a largo plazo. En tal sentido, el necesario balance que demanda la actual coyuntura también requiere interrogarse acerca de las condiciones que fijan límites estructurales a cualquier programa de reactivación y crecimiento. Al respecto, aunque no es esta la oportunidad para profundizar el tema, cabe advertir sobre el riesgo que encierra poner demasiadas expectativas en el “derrame social” que podrían generar las nuevas inversiones. Esto debido fundamentalmente a que el sistema económico argentino presenta una serie de barreras estructurales que operan como freno al desarrollo con inclusión social: a) concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios; b) profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo y la calidad de empleos y las remuneraciones; c) fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes; d) imposibilidad para la difusión microeconómica de los progresos científico-tecnológicos; y, no menos importante, e) la vigencia de patrones desiguales y socialmente segmentados de consumo, junto a crecientes desequilibrios fiscales y comerciales en el marco de una estructura tributaria regresiva.

En este complejo escenario, la acumulación de críticas sobre el deterioro real del presupuesto familiar, los riesgos de desempleo y la falta todavía de señales claras en materia de inversión y la preocupación cierta de que se esté generando una nueva capa de pobres han motivado a algunos especialistas a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas, así como sobre la necesidad de contar con un

programa integral que promueva la inclusión social con la contribución de todos los sectores. Sin duda, resulta deseable contar con un instrumento de esta naturaleza como política de Estado que comprometa al gobierno, trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, asumiendo que es una tarea de todos. Pero en principio el argumento resulta falaz –cuando no engañoso– si la convocatoria no hace explícita las desiguales responsabilidades que tuvieron y tienen los diferentes actores sociales en la actual situación, así como la necesidad de enfrentar no sólo la emergencia, incluyendo los temores sociales como parte de la realidad, sino también las mencionadas barreras estructurales a través de una estrategia más equilibrada.

Es ilusoria cualquier asignación compartida de responsabilidades cuando en realidad los actores de carne y hueso –los institucionalizados y las capas de trabajadores informales, pobres o marginados no representados por nadie– no tuvieron igual acceso al reparto de beneficios mientras se inflaban recursos. En este sentido, no parece justo que una vez finalizada la supuesta etapa de bonanza se solicite que todos paguen por igual sus costos. Mucho más si se tiene en cuenta que es también desigual la capacidad que tienen los actores involucrados para protegerse de un ajuste económico cuando las reglas las fijan los mercados sin una adecuada intervención reguladora del Estado. Sólo bajo un encuentro económico-social amplio, en donde se pongan en discusión las diferentes responsabilidades en juego entre quienes han sido particularmente empoderados, podrá surgir tanto un plan de emergencia como de desarrollo que priorice a los sectores más débiles, seguramente ausentes en la mesa de negociaciones.

Más allá de que tal convocatoria a un acuerdo económico-social siga estando ausente, se imponen las siguientes preguntas. ¿Se están repartiendo con equidad los costos de la herencia? ¿Existe un plan integral de emergencia que prevenga y contemple las injusticias que provoca la actual transición? ¿Son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres? Las investigaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina muestran que muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan. Asimismo, la confianza en un supuesto “derrame” no puede ignorar que cambios no deseados en las variables económicas nacionales e internacionales pueden agravar rápidamente el escenario, por lo cual no puede demandarse una confianza ciega en un resultado todavía incierto. En ese contexto, es una tarea urgente del gobierno atender a los sectores más vulnerados por la transición, proteger el empleo actual y activar políticas de empleo con plenos derechos.

En función de esto, las realidades socio-laborales que analiza este informe deben entenderse como un punto de partida, una línea de base, a partir de la cual evaluar tanto en el presente como en el futuro el éxito y/o las limitaciones de las nuevas políticas adoptadas.

ESTRUCTURA SOCIAL DEL TRABAJO Y CALIDAD DE LAS INSERCIÓNES LABORALES EN LA ARGENTINA (2010-2015).

DESAFÍOS PARA LAS ACTUALES POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO

En la Argentina, luego de la aplicación de políticas que culminaron en la crisis económica y social de 2001, y de más de una década signada por el crecimiento y la implementación de normativas laborales protectoras, aún perduran dificultades para lograr un trabajo de calidad, según normas nacionales e internacionales que regulan los derechos laborales y sociales.

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la evolución de la precariedad laboral en los últimos seis años del área urbana de Argentina, determinar las características del empleo generado, la incidencia del sector informal de la estructura productiva y del empleo no asalariado, y la percepción de los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida del trabajo.

Esto se realizará a partir de los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) – Bicentenario (2010-2016), llevada a cabo desde el último trimestre de 2010 y que da cuenta de la situación de la población urbana de 18 o más años.³

1. Situación del escenario laboral

Desde 2007-2008 en la Argentina se desaceleró la creación de empleo y especialmente del empleo de calidad en un contexto de crisis nacional e internacional, culminación de la utilización de la estructura productiva ociosa, desaceleración de inversiones, agotamiento de un modelo de expansión basado en el consumo y limitaciones originadas por restricciones cambiarias. Según los datos del área urbana relevada por la EDSA, entre 2010 y 2015 la propensión de la población a participar del mercado de trabajo se mantuvo prácticamente estable y la proporción de ocupados aumentó en forma levemente significativa. Esto generó que, al final del período, 9,4% de las personas de 18 años y más que concurrían al mercado de trabajo no consiguieran empleo (1,8 millones) (Tabla 1). Si bien este hecho es preocupante, uno de los inconvenientes más serios del escenario laboral es la elevada y persistente precariedad laboral.

Tabla 1: ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACIÓN

³ La EDSA-Bicentenario se relevó en el cuarto trimestre de 2010 a 2015 por medio de una muestra probabilística estratificada de aproximadamente 5.700 hogares urbanos, recogiendo a través de la misma datos del barrio, la vivienda, el hogar y de las personas convivientes. En ese marco quedó seleccionada una muestra de población de 18 años o más, la cual fue entrevistada a través de un cuestionario multipropósito que abordó aspectos objetivos y subjetivos de las condiciones de vida de dicha población. Por tratarse de un estudio basado en un muestreo de tipo probabilístico, las estimaciones son generalizables a toda la población adulta que en ese momento residía en ciudades de más de 80 mil habitantes. Por mayores detalles ver la ficha técnica en el anexo.

Años 2010-2015. En porcentajes de población ocupada de 18 años y más.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TASA DE ACTIVIDAD	65,9	65,7	65,2	65,6	66,1	66,2
TASA DE EMPLEO	58,4	59,9	59,0	59,8	60,1	60,0
TASA DE DESOCUPACIÓN	11,4	8,8	9,6	8,8	9,1	9,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

En 2011, como correlato de la expansión económica, se observa uno de los menores niveles de desocupación (8,8%) y la mayor proporción de empleo pleno⁴ (45,1%) de todo el período. Independientemente de esto, entre 2010 y 2015, los trabajadores a los cuales se les reconocía plenamente sus derechos pasaron de representar 44% a 43% (8,3 millones) y los de empleo precario pasaron de constituir 35,5% a 31,9% (6,2 millones) de la población económicamente activa.

Complementariamente, se incrementó, especialmente desde 2013, la participación de los trabajadores que realizan changas, actividades de escasa productividad o contraprestaciones de programas de empleo, pasando de representar un 9,2% a 15,6% (3 millones) de la población económicamente activa en 2010 y 2015, respectivamente (Tabla 2).

Durante todo el período se mantuvo estable y elevado el riesgo de desempleo. La desaceleración de la creación de puestos de trabajo y el elevado nivel de rotación laboral determinaron que en 2015 24,9% de los activos se haya encontrado por lo menos una vez desocupado en el último año (Tabla 2).

Tabla 2: CALIDAD DEL EMPLEO

Años 2010-2015. En porcentajes de población económicamente activa de 18 años y más.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EMPLEO PLENO	44,0	45,1	43,9	42,7	42,7	43,0
EMPLEO PRECARIO	35,5	34,7	34,9	33,5	32,7	31,9
SUBEMPLEO INESTABLE	9,2	11,4	11,6	15,0	15,5	15,6
DESEMPLEO ABIERTO	11,4	8,8	9,6	8,8	9,1	9,4
RIESGO DE DESEMPLEO	24,6	23,4	24,5	26,4	26,1	24,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Si bien el análisis anterior expresa contundentemente el cambio de la composición del empleo con una mayor tendencia al aumento relativo del subempleo inestable, se propone en la Tabla 3 un análisis de la evolución de los puestos de trabajo que surge de la conjunción de la distribución del empleo con la incidencia de la tasa de actividad de cada año y del crecimiento poblacional. Se observa cómo, entre 2010 y 2015, el empleo total se expandió 8% pero se incrementó sólo 3% la cantidad de puestos de trabajo con empleo pleno de derechos, disminuyó en 5% el número de empleos precarios y aumentaron 80% los ocupados en subempleos inestables. Este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas de empleo contra cíclicas de generación de puestos de trabajo transitorios, fue el que limitó los niveles de

⁴ En el esquema que se encuentra en el anexo pueden verse las definiciones utilizadas para este y el resto de los conceptos presentados.

desocupación en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo genuino.

Tabla 3: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Años 2010-2015. Cantidad de ocupados de 18 años y más. Base 100 = 2010.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EMPLEO PLENO	100	103	101	99	101	103
EMPLEO PRECARIO	100	98	99	97	96	95
SUBEMPLEO INESTABLE	100	126	128	168	176	180
EMPLEO TOTAL	100	104	103	105	107	108

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2. Sector micro-informal

Asimismo, pese al crecimiento económico observado, sigue existiendo un sector micro-informal⁵ dentro de la economía, tan asentado que provoca una segmentación duradera en el mercado del trabajo. Más allá de políticas anticíclicas de generación y sostenimiento del empleo, el impacto de la crisis internacional y los factores locales tienden a consolidar la desigualdad.

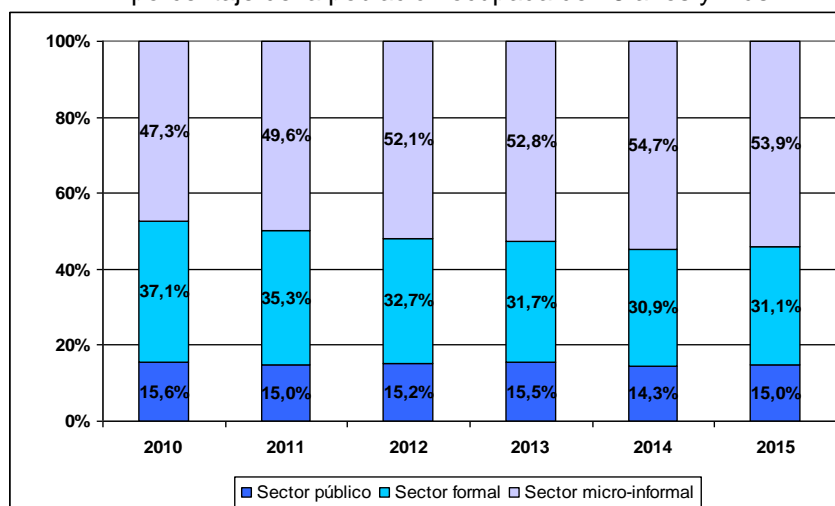
Uno de los problemas principales que genera la existencia de un importante sector micro-informal en la estructura productiva es que este guarda escasa relación con la economía moderna globalizada, sino mayoritariamente con un mercado interno pobre, conformado por los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su característica principal es el reducido nivel de productividad y retribuciones. Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia casi ineludible para el trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, es frecuente el abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social.

Desde 2010 se incrementó la proporción de ocupados en el sector micro-informal alcanzando, en 2015, al 53,9% de los ocupados (9,4 millones). En el mismo año, los ocupados en el sector público representaban 15% del total (incluyen tanto a los trabajadores que cubren las necesidades operativas de funcionamiento del Estado Nacional, estados provinciales y municipales; como a los desocupados que contra prestan en las políticas contra cíclicas de programas de empleo directo). Solamente 31,1% de los ocupados en 2015 realizaban actividades en el sector formal (Figura 1). Este es uno de los principales desafíos para las nuevas políticas a implementarse: la

⁵ Expresa la existencia de un sector productivo de baja productividad y alta rotación de trabajadores, vinculado al mercado interno. Representado por el porcentaje de ocupados en establecimientos pequeños, actividades de servicio doméstico o actividades independientes no profesionales, respecto del total de ocupados. Las definiciones operacionales utilizadas pueden verse en el anexo.

generación de puestos de trabajo de calidad que sean genuinos, sustentables en el tiempo y basados en el crecimiento real de la economía. De este modo podrá disminuir la proporción de trabajadores que sólo logran insertarse en el sector micro-informal de la estructura productiva.

Figura 1: COMPOSICIÓN DE LOS OCUPADOS SEGÚN SECTOR. 2010-2015
En porcentaje de la población ocupada de 18 años y más



Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Durante el período 2010-2015 se mantuvo en niveles relativamente altos el porcentaje de trabajadores no asalariados. Este tipo de empleo, en el caso de los trabajadores no profesionales o que no poseen oficio con mano de obra especializada, se asocia con actividades de menor productividad y retribución. A nivel general, en 2015, un 43,9% del total de ocupados realizaba actividades no asalariadas. En el mismo año, este tipo de trabajo incluía al 20,7% de los trabajadores del sector formal y al 69,6% de los del informal (Tabla 4).

Tabla 4: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PRIVADO POR SECTOR
Años 2010-2015. Porcentaje respecto de la población ocupada respectiva de 18 años y más.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SECTOR FORMAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	82,0	79,4	80,1	73,1	79,0	79,3
NO ASALARIADO	18,0	20,6	19,9	26,9	21,0	20,7
SECTOR MICRO-INFORMAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	21,9	31,5	32,3	25,7	27,8	30,4
NO ASALARIADO	78,1	68,5	67,7	74,3	72,2	69,6
EMPLEO TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	56,4	58,7	58,2	52,3	54,0	56,1
NO ASALARIADO	43,6	41,3	41,8	47,7	46,0	43,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

3. Empleo de baja calidad

En función de la clasificación de calidad del empleo realizada se puede unificar a los trabajadores con empleo precario y subempleo inestable en un grupo para el cual no

se cumple la totalidad de los derechos laborales (empleos de baja calidad). Por otra parte, los diferenciales niveles de productividad, los disímiles requerimientos de especialización y las formas más laxas de organización laboral y de controles por parte del Estado hace que generalmente los ocupados en el sector micro-informal presenten una menor calidad de empleo. Se suma a esto que es común que la incidencia del empleo de baja calidad se incremente en el caso en que los trabajadores sean no asalariados.

Desde 2010 se incrementó levemente la proporción de ocupados en un empleo precario o en un subempleo. En 2010 se encontraban en esta condición un 50,4% de los ocupados mientras que en 2015 llegaron a 52,5%. En el caso de los asalariados pasó de 25,2% a 29,9% y en el de los no asalariados de 82,9% a 81,3%, entre 2010 y 2015 (Tabla 5).

La incidencia del incumplimiento de los derechos laborales es altamente diferencial según el sector de ocupación. En 2015 se encontraban en esta situación el 82,2% de los trabajadores del sector micro-informal mientras que solo el 20,5% de los del formal y el 12,1% de los ocupados en el sector público. Esta distribución se modificó levemente entre 2010 y 2015 a favor de los trabajadores del sector público y del segmento informal, mientras que aumentó en el caso del sector formal. Sin embargo, en términos generales, la población ocupada en puestos precarios o subempleos pasó de 50,4% a 52,5%.

Tabla 5: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE BAJA CALIDAD

Años 2010-2015. Porcentaje de empleo precario y subempleo inestable respecto de la población ocupada respectiva de 18 años y más.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SECTOR PÚBLICO	20,4	14,8	20,0	19,9	11,9	12,1
SECTOR FORMAL	17,9	19,2	21,9	22,6	21,7	20,5
ASALARIADO	14,7	15,9	18,4	18,3	19,4	17,8
NO ASALARIADO	32,6	32,1	36,2	34,4	30,1	31,1
SECTOR MICRO-INFORMAL	85,6	83,7	79,2	81,3	81,5	82,2
ASALARIADO	62,9	65,4	57,4	50,3	58,6	64,5
NO ASALARIADO	92,0	92,1	89,6	92,1	90,3	89,9
EMPLEO TOTAL	50,4	50,6	51,5	53,2	53,0	52,5
ASALARIADO	25,2	28,8	30,1	27,1	28,5	29,9
NO ASALARIADO	82,9	81,6	81,3	81,8	81,8	81,3

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

En el caso de los asalariados con estos problemas de empleo pasaron de 25,2% a 29,9%, y para los no asalariados de 82,9% a 81,3%, es decir, sin un cambio significativo. A este respecto es importante destacar la disminución, a partir de 2014, de la precariedad de los trabajadores del sector público, presumiblemente por la implementación de concursos y otros procedimientos de pase a planta permanente de algunos trabajadores no estables. Al igual que a nivel general la condición de no asalariado se asocia con el aumento del empleo de baja calidad (Tabla 5).

En 2015, en el sector formal, presentaron un empleo de baja calidad el 31,1% de los no asalariados y sólo el 17,8% de los asalariados. Para el mismo año, en el sector

informal estos valores eran de 89,9% y 64,5%, respectivamente (Tabla 5). Se identifica en esto otro de los desafíos a resolver: la inclusión en el empleo formal de un vasto grupo de trabajadores que desarrollan actividades en un sector informal de la estructura productiva con el rol de cuentapropistas en ocupaciones de muy bajo nivel de calidad laboral.

4. Percepciones ante la pérdida del empleo

En el contexto de estancamiento de creación de puestos de trabajo de calidad, la escasa creación de empleo genuino fue percibida por los trabajadores y se convirtió en preocupación ante la posible pérdida del empleo. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen. Este porcentaje se incrementó, entre 2010 y 2015, de 81,2% a 84,5% (Tabla 6).

Tabla 6: PERCEPCIÓN ANTE LA PÉRDIDA DEL TRABAJO
Años 2010-2015. En porcentajes de población ocupada de 18 años y más.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PIENSA QUE NO PODRÁ CONSEGUIR UN TRABAJO SIMILAR O MEJOR DEL ACTUAL	81,2	76,8	80,9	82,6	84,0	84,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Los datos evidencian la continuidad de la percepción negativa que poseen los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida del trabajo. Excepto en 2011, año de leve reactivación económica, en el resto del período analizado, el porcentaje de ocupados que piensan que no podría conseguir un trabajo igual o mejor supera el 80%. Además, la visión pesimista de la evolución personal en el mercado de trabajo se incrementa año tras año en un proceso en el cual la dinámica económica y las políticas públicas implementadas no fueron lo suficientemente eficientes en la generación y sustentación de empleo de calidad.

Por otra parte, en 2015, el sector de inserción se encuentra asociado a estas percepciones. El porcentaje de ocupados que expresan que no conseguirían un trabajo igual o mejor es similar entre los del sector público y el privado formal (81,7% y 81,4%, respectivamente) incrementándose la percepción negativa al 87% de los del sector informal. En el mismo año, el 80,8% de los trabajadores con empleo pleno expresaron su percepción sobre las dificultades de conseguir un trabajo igual o mejor, incrementándose en los de empleo precario y en los de subempleo inestable (86,4% y 90,5%, respectivamente). Las evidencias muestran como los análisis de la calidad del empleo y su evolución negativa coinciden con las percepciones de los trabajadores en un contexto de ausencia de creación de empleo genuino y estrategias de políticas pública que solo logran contener la desocupación vía políticas de creación de empleo transitorio.

5. Características del empleo según cobertura social de los hogares

El Observatorio de la Deuda Social Argentina realizó una clasificación de los hogares según la cobertura social de la que disponen las familias que los integran. Esto se realizó no solamente con el fin de medir cuántos hogares son destinatarios de la asistencia social sino también determinar, según otros indicadores de carencias, la incidencia de los hogares que necesitarían esa asistencia pero no la reciben. En función de esa clasificación, se observa la siguiente distribución de hogares y de población económicamente activa:

- El 59,5% del total de hogares relevados por la EDSA posee un jefe con empleo pleno de derechos, jubilado o con ingresos provenientes de rentas (en ellos reside el 57,4% de la PEA: 11,1 millones de personas),
- El 20,8% de los hogares percibe ingresos de algún programa de asistencia social o de empleo (en ellos habita el 20,2% de la PEA: 3,9 millones de personas).
- El 19,7% de los hogares no posee cobertura social o dicha cobertura es deficiente (en ellos reside el 22,4% de la PEA: 4,3 millones de personas).

En 2015, la población de 18 años y más de los hogares que perciben algún programa social presenta una situación laboral más vulnerable: su participación en el mercado de trabajo es menor (únicamente el 62,3% participa en el mercado de trabajo), sus posibilidades de empleo son más escasas (sólo 52,8% de ellos están ocupados) y es mayor el fracaso al buscar un empleo (la desocupación llega al 15,3% de los activos). En este tipo de hogares, el bajo nivel de actividad puede ser explicado porque gran parte de los programas de ayuda desarrollados por el Estado no poseen contraprestación laboral. Por otra parte, la elevada tasa de desocupación expresa el inconveniente estructural que deben vencer al intentar conseguir un empleo (Tabla 7).

Para el mismo año, la población de 18 años y más de los hogares que no poseen cobertura o dicha cobertura es deficiente, en comparación con la del resto de los hogares, debe redoblar sus esfuerzos para captar ingresos: su nivel de actividad es alto (72,1% participa en el mercado de trabajo), sus posibilidades y su necesidad de empleo son mayores ante la falta de transferencias del Estado (64,3% de ellos están ocupados) y, posiblemente por los bajos niveles de empleabilidad y de capacitación formal, su desempleo es intermedio (la desocupación implica al 10,8% de los activos). Por su parte, los hogares que poseen jefe con empleo pleno, jubilado o rentista se encuentran en una mejor posición laboral relativa. Tanto su nivel de actividad como de empleo son relativamente bajos por la condición de jubilado o rentista de algunos de sus jefes (65,6% y 61,1%, respectivamente) y su desocupación es baja (6,8%), presumiblemente por el alto nivel de empleabilidad de sus integrantes (Tabla 7).

Tabla 7: ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACIÓN SEGÚN TIPO DE HOGAR

Años 2015. Población de 18 años y más.

	Percibe algún plan de ayuda familiar	Sin cobertura o con cobertura deficiente	Jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas	Total de hogares
TASA DE ACTIVIDAD	62,3	72,1	65,6	66,2
TASA DE EMPLEO	52,8	64,3	61,1	60,0
TASA DE DESOCUPACIÓN	15,3	10,8	6,8	9,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Los activos de 18 años y más de los hogares que perciben algún plan de asistencia del Estado se encuentran en una escenario laboral sumamente adverso: únicamente 5% de ellos pudo obtener un empleo pleno de derechos, la mitad poseen un empleo precario, 29,5% poseen sólo un subempleo inestable y 15,3% directamente no consiguió ningún tipo de empleo. Además de esto, el riesgo de desempleo es alto, un 39% de sus activos estuvo por lo menos una vez desocupado en el último año (Tabla 8). En comparación con estos hogares, la población activa de familias sin cobertura de seguridad social o con cobertura deficiente presentan una situación laboral relativamente similar, a excepción de un mayor porcentaje de empleo protegido (15,4% en lugar de 5%) y un nivel de desocupación más bajo (10,8% en comparación con 15,3% de los hogares con plan de ayuda). Contrariamente, la población de hogares con jefe con empleo pleno, jubilado o rentista presenta una situación laboral marcadamente mejor que la del resto de los hogares (Tabla 8).

Tabla 8: CALIDAD DEL EMPLEO SEGÚN TIPO DE HOGAR

Años 2015. En porcentajes de población económicamente activa de 18 años y más.

	Percibe algún plan de ayuda familiar	Sin cobertura o con cobertura deficiente	Jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas	Total de hogares
EMPLEO PLENO	5,0	15,4	67,2	43,1
EMPLEO PRECARIO	50,2	49,6	18,6	31,9
SUBEMPLEO INESTABLE	29,5	24,2	7,3	15,6
DESEMPLEO ABIERTO	15,3	10,8	6,8	9,4
RIESGO DE DESEMPLEO	39,0	36,4	15,4	24,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

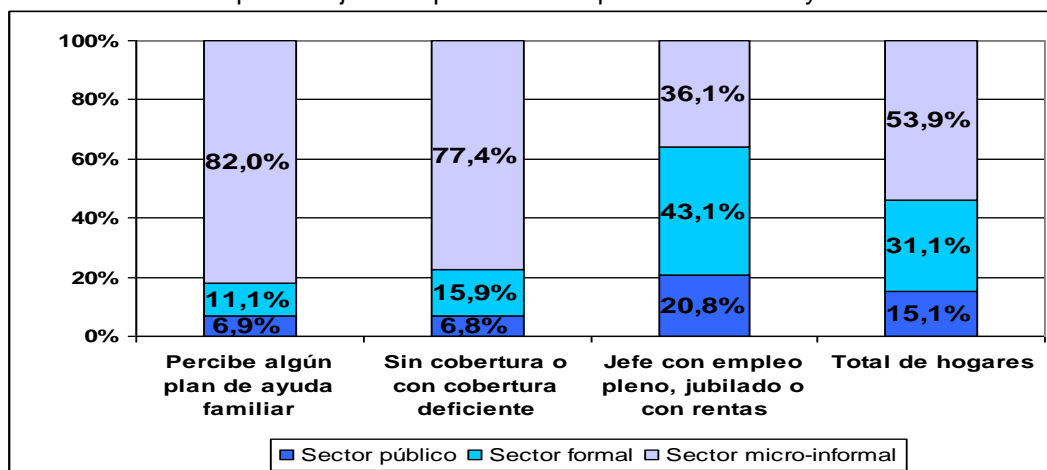
Sin duda, la actual coyuntura económica agrava especialmente la situación socio-laboral de estos sectores cuyas actividades están fuertemente vinculados con el nivel de actividad y el consumo en el mercado interno. En particular, cabe destacar la situación de ese 20% de hogares (20% de la PEA) sin vinculación alguna con la seguridad social ni con los programas de asistencia pública. Son ellos fundamentalmente los nuevos pobres que se ven fuertemente afectados por el aumento del costo de vida, los servicios públicos y el transporte, así como por la caída de nivel de actividad y eventualmente el desempleo, sin disponer de representación gremial o de compensaciones como los aumentos salariales formales, el salario familiar, las tarifas sociales, etc.

La persistencia de un sector micro-informal dentro de la economía genera una segmentación en el mercado del trabajo que signa a los ocupados residentes en los

tipos de hogares que se está analizando. Las actividades desarrolladas en el sector micro-informal de la estructura productiva guardan escasa relación con la economía moderna globalizada y se constituyen en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia casi ineludible para el trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, es frecuente el abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social.

En 2015 las particularidades de inserción laboral de los ocupados de hogares en los que reciben algún programa de asistencia son similares a los de hogares que no poseen cobertura o que esta es deficiente: mayoritariamente se encuentran ocupados en el sector micro-informal (82% y 77,4%, respectivamente), en mucha menor medida en el sector formal (11,1% y 15,9%, para cada tipo de hogar nombrado) y en el sector público (6,9% y 6,8%, respectivamente). Contrariamente, los ocupados de los hogares de jefes con empleo pleno, jubilado o rentistas, se insertaron en gran medida en el sector formal (43,1%), en el sector micro-informal (36,1%) y en el sector público (20,8%). Figura 2

Figura 2: Composición de los ocupados según tipo de hogar. 2015
En porcentaje de la población ocupada de 18 años y más



Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Las situaciones de los hogares asistidos por programas sociales o sin seguridad social contrastan marcadamente con la inserción laboral que registra la población activa de los hogares cubiertos por la seguridad social o los empleos de calidad. En principio, entre los trabajadores de estos hogares el 20,8% está ocupado en el sector público y 43,1% en el sector privado formal. Por lo tanto, ocurre lo mismo en términos de calidad de la inserción laboral: 67,2% cuenta con un empleo de alta calidad y sólo 6,8% se encuentran desocupados, más de la mitad con un tipo de desempleo friccional. En

cualquier caso, se trata de segmentos que sin duda están sufriendo la recesión pero de manera mucho más amortiguadas por factores varios: aumentos paritarios, incrementos jubilatorios, ampliación de las asignaciones familiares, reducción del mínimo no imponible, etc.

Un elevado porcentaje de cuenta propias no asalariados del sector micro-informal se concentra en los hogares en los que se percibe algún programa social de ayuda familiar y en los que no poseen cobertura o tienen cobertura deficiente (60-61%). Esta proporción se incrementa aproximadamente al 75% si se considera al sector micro-informal y se reduce al considerar el sector formal, al 4,4% si se consideran los trabajadores de hogares donde se percibe algún plan de ayuda familiar y al 12,4% si se refiere a los ocupados residentes en hogares sin cobertura o con cobertura deficiente. La presencia de cuentapropistas es menor si los hogares poseen jefe con empleo pleno, jubilado o rentista; a nivel general 32,5% de los trabajadores de estos hogares son no asalariados, siendo del 62,2% si se considera al sector micro-informal y sólo el 23,2% si se refiere a los ocupados en el sector formal (Tabla 9).

Tabla 9: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PRIVADO POR TIPO DE HOGAR

Años 2010-2015. Porcentaje respecto de la población ocupada respectiva de 18 años y más.

	Percibe algún plan de ayuda familiar	Sin cobertura o con cobertura deficiente	Jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas	Total de hogares
SECTOR FORMAL	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	95,6	87,6	76,8	79,3
NO ASALARIADO	4,4	12,4	23,2	20,7
SECTOR MICRO-INFORMAL	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	26,2	25,0	37,8	30,4
NO ASALARIADO	73,8	75,0	62,2	69,6
EMPLEO TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
ASALARIADO	39,0	39,9	67,5	56,1
NO ASALARIADO	61,0	60,1	32,5	43,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Si bien es elevada la preocupación general de los trabajadores ante la pérdida del trabajo, esta se incrementa en los trabajadores de hogares en los que la seguridad social contributiva no está presente. Piensan que no podrán conseguir un trabajo similar o mejor al actual el 89,9% de los ocupados de hogares que perciben algún plan de ayuda familiar, el 87,7% de los de hogares sin cobertura o con cobertura deficitaria y solamente 81,6% de los ocupados residentes en hogares con jefe con empleo pleno, jubilado o rentista (Tabla 10).

Tabla 10: PERCEPCIÓN ANTE LA PÉRDIDA DEL TRABAJO SEGÚN TIPO DE HOGAR

Años 2015. En porcentajes de población ocupada de 18 años y más.

	Percibe algún plan de ayuda familiar	Sin cobertura o con cobertura deficiente	Jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas	Total de hogares
PIENSA QUE NO PODRÁ CONSEGUIR UN TRABAJO SIMILAR O MEJOR DEL ACTUAL	89,9	87,7	81,6	84,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Las retribuciones al trabajo difieren según el perfil de trabajadores de cada uno de los tipos de hogar. El mayor ingreso medio laboral mensual lo reciben los ocupados de hogares con jefe con empleo pleno, jubilado o rentista (\$ 9.889), en menor medida los de hogares sin cobertura o con cobertura deficiente de seguridad social (\$ 5.508.-) y, por último, los trabajadores de hogares que perciben algún plan de ayuda familiar (\$ 4.709.-). El ingreso horario de los ocupados residentes en hogares que perciben algún plan de ayuda familiar es similar a los de hogares sin cobertura o que la poseen en forma deficiente, cerca de \$ 40.- Este valor es duplicado (\$ 82,5.-) si se considera el promedio de retribuciones horarias de trabajadores residentes en hogares con jefes con empleo pleno, jubilado o rentista (Tabla 11).

Tabla 11: INGRESOS LABORALES SEGÚN TIPO DE HOGAR

Años 2015. En pesos.

	Percibe algún plan de ayuda familiar	Sin cobertura o con cobertura deficiente	Jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas	Total de hogares
MEDIA DE INGRESOS LABORALES	4.709	5.508	9.889	7.931
MEDIA DE INGRESO HORARIO	39,9	40,0	82,2	64,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

Los datos observados muestran que la situación laboral de los trabajadores residentes en hogares que perciben algún programa de asistencia social es más vulnerable que la del resto de los trabajadores: alta tasa de desocupación, elevada incidencia del empleo precario y del subempleo inestable, excesiva presencia de ocupaciones en el sector micro-informal de la economía, gran porcentaje de empleo por cuenta propia de baja calidad, percepciones negativas ante la posibilidad de perder el empleo y una baja remuneración mensual y horaria; son algunos de los factores que justifican y expresan la necesidad de realizar una ampliación de las acciones de las políticas de estado en este grupo de hogares. Asimismo, otro grupo de hogares, en algunos casos con similares requerimientos y nivel de deuda social, no poseen cobertura de las políticas públicas y expresan la necesidad de la ampliación de las familias que forman parte del esquema de protección proveniente del Estado. Tutela necesaria, por lo menos, hasta que la estructura productiva genere empleo genuino para suplir con los frutos del trabajo las necesidades de las familias.

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES

CALIDAD DEL EMPLEO		
EMPLEO PLENO DE DERECHOS	Incidencia de las relaciones laborales de calidad en el total de la población económicamente activa, considerando la realización de aportes previsionales y la continuidad laboral.	Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas profesionales y no profesionales con continuidad laboral que realizan aportes al Sistema de Seguridad Social; y patrones o empleadores con continuidad laboral que también realizan aportes a dicho sistema, respecto del total de personas activas.
EMPLEO PRECARIO	Incidencia de las relaciones laborales precarias en el total de los activos, considerando la no realización de aportes previsionales y la ausencia de continuidad laboral.	Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que no se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas no profesionales que no realizan aportes al Sistema de Seguridad Social y/o sin continuidad laboral; y patrones o empleadores que no realizan aportes a este sistema y/o sin continuidad laboral, respecto del total de personas activas.
SUBEMPLEO INESTABLE	Incidencia de las relaciones laborales de subempleo inestable en el total de los activos, considerando la no realización de aportes previsionales, la ausencia de continuidad laboral, la baja remuneración y/o la situación de los beneficiarios de programas de empleo.	Porcentaje de personas ocupadas en trabajos temporarios de baja remuneración o changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de empleo con contraprestación laboral, respecto del total de personas activas.
DESEMPLEO	Incidencia de la situación de desocupación (búsqueda activa) en la población económicamente activa.	Porcentaje de personas que no trabajan pero que en el momento del relevamiento buscan activamente trabajo y están en disponibilidad de trabajar, respecto del total de personas activas.
TRABAJADORES OCUPADOS EN EL SECTOR MICRO-INFORMAL	Expresa la existencia de un sector productivo de baja productividad y alta rotación de trabajadores, vinculado al mercado interno.	Porcentaje de ocupados en establecimientos pequeños, actividades de servicio doméstico o actividades independientes no profesionales, respecto del total de ocupados.
PERCEPCIONES ANTE LA PÉRDIDA DEL EMPLEO	Percepción de los ocupados de no conseguir fácilmente un empleo mejor o similar ante la posibilidad de pérdida del empleo actual.	Porcentaje de ocupados que expresan que no conseguirían fácilmente un empleo mejor o similar en el caso de despido o renuncia, respecto del total de ocupados.
INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO		
INGRESOS MENSUALES	Total de ingreso laboral percibido durante el último mes por la población económicamente activa ocupada.	Media de ingreso laboral mensual* correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos de diciembre de 2015. <i>* Se estimaron ingresos laborales totales cuando los mismos no fueron declarados.</i>
REMUNERACIÓN HORARIA	Total de ingreso laboral por hora percibido durante el último mes por la población económicamente activa ocupada, normalizado por la cantidad de horas trabajadas durante el mes de referencia.	Media de ingreso laboral horario* correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos de diciembre de 2015. <i>* Se estimaron las horas trabajadas durante el último mes cuando las mismas no fueron declaradas.</i>

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / BICENTENARIO 2010-2016	
Dominio	Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.
Universo	Hogares particulares. Población de 18 años o más.
Tamaño de la muestra	Muestra puntual hogares: aproximadamente 5.700 casos por año.
Tipo de encuesta	Multipropósito longitudinal.
Asignación de los casos	No proporcional post-calibrado.
Puntos de muestreo	952 radios censales.
Dominio de la muestra	Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más agrupados en 3 grandes conglomerados (Gran Buenos Aires, Otras Áreas Metropolitanas y Resto urbano). GBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur. Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza. Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.
Procedimiento de muestreo	Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.
Criterio de estratificación	Estratificación socioeconómica efectuada por clasificación y ordenación de los radios censales, según el promedio de nivel educativo del jefe de hogar en cada radio censal.
Fecha de realización	Cuarto trimestre de cada año.
Error muestral	+/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.